Resultando que requerido el ejecutado para que otorgase á favor de la compradora ó su representacion la oportuna escritura se solemnizó esta el 21 de Julio del año anterior por ante el Notario de la misma Ciudad Don Juan Ramon de Torres, por cuyo documento, haciéndose relacion de estos antecedentes, vendió Don Luis á su esposa Doña Luisa dicha hacienda en el referido precio, expresando á nombre de la compradora el apoderado Don Marcelino, en las cláusulas 2ª y 5ª que entregaba como de contado el importe dicho de la dote y aportaciones que su poderdante hizo á su matrimonio, segun escritura de 26 de Mayo de 1876, y que otorgó Don Luis á favor de su esposa ante el Notario de Guayama Don José Mariano Capó y cuyo instrumento Doña Luisa daba por cancelado y sin valor ni efecto, dándose tambien por satisfecha de la expresada cantidad, y obligándose al pago de los restantes acreedores hipotecarios de su marido en la forma y términos ofrecidos en el remate, en garantía de lo cual dejaba hipotecada la propia hacienda por todo su valor;

Resultando que presentada la escritura en el Registro de la propiedad de Guayama, el Registrador sustituto inscribió la siguiente nota: "Denegada la inscripción de este documento por no aparecer lícito el contrato contenido en el mismo y no siendo subsanable dicha falta no es tampoco admitida la anotación preventiva;"

Resultando que Don Marcelino Cintron con la representación acreditada entabló recurso gubernativo, fundándolo en que por la adquisición de bienes que su principal hizo en pública subasta no puede decirse que contratara con su marido si no con el Juez ante quien se celebró el remate y lo aprobó, previa conformidad del ejecutado y ejecutante, que los bienes que se rematan pertenecen al ejecutante y no son ya de la propiedad del ejecutado quien ni la posesion de ellos tiene ni e cabe mas participacion en la venta que los de facilitar los títulos para el otorgamiento de la escritura la que hasta puede otorgarse de oficio por el Juez si el ejecutado se niega á ello; y que su constituyente era dueña ó mejor acreedora privilegiada en los mismos bienes rematados por su aportación matrimonial, por lo que puede decirse que no ha hecho mas que posesionarse de lo que legítimamente le pertenecía;

Resultando que pedido informe al Registrador lo evacuó acompañando certificación literal de las dos inscripciones de las anteriores fincas que agrupadas vinieron á formar la nuevamente creada con el nombre de Luisa para demostrar que ninguno de los gravámenes que las afectan están á favor de Doña Luisa Pillot por dote ó otra clase de aportaciones al matrimonio, y que una de ellas habia sido comprada por los ya entonces esposos Don Luis y Doña Luisa y razonando su negativa, manifestó: que la compraventa otorgada por los esposos Boyrie, es completamente nula como todos los contratos celebrados entre cónyugos á excepcion de los permitidos en derecho; que no teniendo el ejecutante ni el Juez dominio alguno sobre los bienes que se rematan no pueden trasmitir la propiedad, limitándose la intervencion del uno y las funciones del otro á compeler al deudor á la realizacion y aun cuando sea el Juzgado quien otorgue de oficio la escritura de venta, tiene declarado el Supremo en sentencia de 13 de Diciembre de 1866, que se supone la ejecuta el dueño de los bienes en cuyo nombre obra el Juez; que por el artículo 26 de la Ley hipotecaria de Puerto-Rico, orden del Poder Ejecutivo de 24 de Noviembre de 1874 y Real Decreto de 3 de Enero de 1876, tienen competencia los Registradores para examinar la naturaleza y legalidad del contrato que aparece celebrado, sin que por esta el informante examine los fundamentos de los autos y diligencias del juicio ejecutivo seguido, que de la escritura presentada resultan una devolucion ó dacion de bienes por parte del marido á favor de la mujer en pago de su dote y una venta á la misma del resto de la hacienda Luisa que en cuanto al primer extremo, hallándose declarado por el Supremo en sentencia de 23 de Octubre de 1857 y 11 de Enero de 1859 que fuera de los casos exceptuados están prohibidos los contratos entre marido y mujer, y habiendo resuelto la Direccion de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado en 17 de Enero de 1876, que no es lícito la obligacion en que el marido constituye hipoteca especial en sustitucion de las generales tácitas por la dote y para firmes, sin que conste la entrega de tales aportaciones, no bastando la confesion del marido hecha despues de algunos años de celebrado el matrimonio, ménos puede permitirse en el caso actual la trasmision de dominio de bienes en reintegro de una dote que no consta debidamente, si se entregó, si fué estimada ó inestimada y que á lo sumo se ha confesado muchos años despues del casamiento, y cuya adjudicacion ó dacion de bienes es contrario á la sociedad conyugal por que ántes de concluirse ó disolverse se devuelve el capital aportado para sus cargas; que respecto al segundo particular ó sea á la venta, tales contratos se consideran nulos por reputarse donaciones que están prohibidas entre los cónyuges, los que segun sentencias del Supremo de 3 de Junio de 1873, se estiman en derecho como una sola persona; que este contrato conduciría al absurdo, pues siendo ganancias los bienes que en matrimonio adquiere la mujer por compra segun las leyes 1ª y 4ª, título 4º libro 10 de la Novísima recopilacion y correspondiendo al marido la administracion y dominio de sus bienes, resultaría que tan dueño quedaria el Sr. de Boyrie de la finca, como si no la hubiese vendido; y Doña Luisa privada de la administracion y disposicion de ella como si no la hubiese comprado; que inmediatamente despues y sin la anu-

cia de la mujer pudo el primero volverla á vender á un extraño y que debiéndose inscribir á nombre del marido los bienes que la mujer adquiere por título oneroso, en el presente caso se daría el contrasentido de que habria de inscribir el dominio de la cosa á favor del vendedor de ella; y que por último si contratando la mujer con su marido se ha obligado á pagar las deudas de este, para lo cual hipoteca la finca comprada y sin que el marido haya sido relevado de sus obligaciones por los acreedores pues el ejecutante se ha reservado el derecho de seguir en su caso el ejecutivo, resulta que la mujer se ha obligado por su consorte mancomunadamente con él como garantía no solamente de los bienes que pretende adquirir por la compra, sino tambien de los que dice han venido á reemplazar su dote, cuyas obligaciones no son válidas para inscripción segun la citada Direccion de los Registros en resolucion de 27 de Diciembre de 1876;

Resultando que el Juez Delegado declaró haber lugar al recurso y decidió que el título era inscribible por las siguientes razones: 1ª porque la venta no habia sido hecha por el marido á la mujer, sino por la Autoridad judicial competente para estos casos: 2ª que la nulidad que pueda alegarse por los interesados que se crean perjudicados en la venta verificada, no es en esta circunstancia la oportunidad de hacer tal declaracion, que solo compete al Juez que deba conocer de la reclamacion en el juicio correspondiente: y 3ª que no pueda ponerse en duda la capacidad de los otorgantes y la legalidad de las formas de la escritura;

Resultando que notificada la providencia apeló de ella el Registrador, y que el Presidente de la Audiencia de Puerto-Rico la confirmó aceptando sus fundamentos, y por considerar que no existe ninguna disposicion que prohíba á la mujer casada adquirir bienes de su marido sacados á pública subasta por mandato judicial, pues esta circunstancia aleja la presuncion de que sea una donacion entre cónyuges llevando consigo la conveniencia para la sociedad conyugal de que se conserven en ella los bienes adquiridos;

Vistos los artículos 26, 73 y 74 de la Ley hipotecaria de Puerto-Rico, los 71 y 72 de su Reglamento, la Ley 61 de Toro (3ª título 11 libro 10 de la Novísima Recopilacion) y las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Octubre de 1857 y 3 de Enero de 1859:

Considerando que la cuestion que se ventila en el presente recurso se reduce á resolver si no obstante la legalidad de los antecedentes y formas extrínsecas de la escritura de venta judicial presentada á inscripción, es sin embargo inscribible, por ser eficaces en derecho los pactos y estipulaciones consignadas por los contratantes que la otorgaron y atendida la capacidad jurídica que las Leyes atribuyen á la mujer casada:

Considerando que al calificar los Registradores la legalidad de las escrituras presentadas á inscripción están en el deber de negarla respecto de aquellas que contengan faltas insubsanables, ó sean, segun la Ley, las que produzcan necesariamente la nulidad de la obligacion contraída, ó afecten su validez por su naturaleza, condiciones, calidad de las personas que la otorgan ó otras causas semejantes é independientes de la forma extrínseca del instrumento; entendiéndose limitada tal calificacion al dicho efecto de negar la inscripción y sin que por ello se impida ni prejuzgue el juicio que los interesados pueden seguir ante los Tribunales sobre la eficacia ó ineficacia de la misma obligacion:

Considerando que la imputacion que como parte de pago en la finca subastada hace la mujer al marido del total de una aportacion matrimonial que se supone confesada por el último, es una estipulacion de devolucion de bienes que envuelve con ocasion del primitivo contrato de compraventa en subasta pública otro especial de adjudicacion ó cesion de bienes en pago de dote, cuyo convenio privado entre marido y mujer, además de ser nulo en derecho por no encontrarse comprendido en los contratos que expresamente exceptúan y permiten las Leyes entre los cónyuges, es precisamente contrario á la índole y fin de la sociedad conyugal constante matrimonio, y mientras no haya lugar á la liquidacion de aquella en forma mediante causa suficiente justificada y por el procedimiento legal correspondiente:

Considerando que la restante forma de pago de la finca vendida obligándose la compradora á la satisfaccion de las demás del ejecutado y afianzando por los términos y plazos ofrecidos con la hipoteca de la misma finca que compra, ya implique en el contrato una obligacion mancomunada de marido y mujer sin provecho de la última ya se resuelva en un afianzamiento de la mujer por el marido, en ambos casos se prohíbe por la citada Ley de Toro; esta direccion general estimando acertada la calificacion hecha por el Registrador sustituto de Guayama, ha acordado revocar la providencia apelada y declarar improcedente el recurso promovido por el interesado.

Lo que con devolucion del expediente original, digo á V. I. para su conocimiento, el del Registrador é interesado.— Dios guarde á V. I. muchos años.— Madrid 27 de Noviembre de 1882.— El Director general, J. Carrero.— Señor Presidente de la Audiencia de Puerto-Rico.

Lo que por disposicion del Ilmo. Sr. Presidente de esta Real Audiencia se publica en la GACETA OFICIAL en cumplimiento de lo que previene el artículo 87 del Reglamento general para la ejecucion de la Ley hipotecaria de esta Provincia.

Puerto-Rico, 19 de Diciembre de 1882.— El Secretario de gobierno, Rafael Romeu. [5165]

Tesorería general de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

DON FRANCISCO FABRO Y CUYARÉ, Jefe Superior de Administración Civil Honorario, Comendador de número y Caballero de la Real y distinguida Orden de Isabel la Católica, posesor de la de la Orden Civil de la Beneficencia por juicio contradictorio, y Tesorero general de Hacienda pública de esta Isla.

Hago saber: que segun comunicacion de la Administracion Central de Contribuciones y Rentas de esta Isla de 16 del actual, se ha extraviado la carta de pago número 133 de 15 de Febrero de 1875 por valor de 1,245 pesetas equivalentes á 249 pesos fuertes y creditiva del depósito que hizo Don Martin J. Travieso como apoderado y por cuenta de Don José Usera, para responder al cumplimiento de las obligaciones que se le impusieron en el aprovechamiento de las aguas del rio Coamo.

En su virtud y de orden del Ilmo. Sr. Intendente se anuncia en quince números consecutivos de la GACETA OFICIAL para que la persona en cuyo poder se encuentre el referido documento lo presente en esta Tesorería durante el término de publicacion, pasado el cual se tendrá por nulo y de ningun valor ni efecto procediéndose á lo demás que corresponda.

Puerto-Rico, 23 de Noviembre de 1882.— Francisco Fabro. [4763] 15—13

El Ilmo. Sr. Intendente general se ha servido modificar el orden de pago á las clases activas y pasivas correspondientes al presente mes, en la forma siguiente:

- Dia 18. — Seccion 3ª
- 19. — Secciones 2ª, 4ª y 6ª
- 20. — — 5ª y 7ª
- 21, 22 y 23. — Clases pasivas de la Capital.

Enero 2. — Clases pasivas de la Peninsula.

Puerto-Rico, 18 de Diciembre de 1882.— Francisco Fabro. [5159] 3—3

Contaduría general de Hacienda pública

DE LA PROVINCIA DE PUERTO-RICO.

Revista de clases pasivas.— 2º semestre de 1882-83.

MES DE ENERO DE 1883.

A fin de cumplir esta Contaduría general lo dispuestoporel Ministerio de Ultramar en 27 de Noviembre y 16 de Diciembre de 1874, para que las provincias que dirige aquel Departamento, observen la regla 4ª de las contenidas en la disposicion 5ª de la Ley de presupuestos de 25 de Julio de 1855, y la Real orden de 22 de Agosto de aquel año, sobre presentacion personal en acto de revista, cada seis meses, de todos los individuos de Clases pasivas que perciben haberes del Tesoro, ha resuelto el Ilmo. Sr. Intendente que la perteneciente al segundo semestre del actual año económico de 1882-83, principie el 11 del entrante Enero y termine el 20 del mismo, con sujecion á las reglas siguientes:

1ª La revista habrá de ser precisamente personal; se desatenderá toda gestion que tenga por objeto eludir su presentacion los individuos á cuyo favor haya sido declarada la respectiva pension; y además de las fées de existencia y estado de los pensionistas, estos habrán de presentar en dicho acto, su cédula personal del corriente año económico con el documento original que les conceda el derecho, y ambos le serán devueltos.

2ª Las fées de existencia se presentarán por duplicado; un ejemplar para el acto de revista, y otro para el cobro en Tesorería; expresarán el domicilio, estado, clase y concepto por el cual los interesados comprendidos en ellas, son acreedores del Tesoro; contendrán al final la declaracion de no percibir otros haberes de fondos generales, provinciales, municipales, ni de la Real Casa; la fecha será posterior á la en que termina el mes actual; y por último, se completarán con el Vº Bº de la Autoridad competente.

3ª Los que no sepan firmar ó estén por cualquiera causa imposibilitados de hacerlo, designarán persona que á su ruego y á su presencia, lo verifique en su nombre.

4ª Los que residan en la Peninsula, en sus Islas adyacentes, ó en país extranjero, justificarán el acto de revista en la forma que dispone la citada orden de 16 de Diciembre de 1874, expedida por el Ministerio de Ultramar, y cuidarán de adicionar á sus fées de vida la misma declaracion final expresada en la regla 2ª, de no percibir otros haberes, etc.; la fecha del documento que les conceda la pension; el concepto porque la perciben; la cantidad anual en pesos fuertes; y la Autoridad que expidió dicho documento; sin cuyos requisitos no será admitido.

5ª El término que á las clases de que trata la regla anterior se concede para acreditar la revista mensual, es el tiempo que haya de transcurrir entre el primer dia hábil del mes de Enero próximo hasta que se despache para este puerto el primer vapor directo que salga de los de la Peninsula con el correo para esta Antilla que corresponde al 10 de Febrero siguiente.

6ª Los que residan en pueblos de esta Isla donde haya Administraciones, locales ó Colecturías subalternas, pasarán la revista ante los Contadores de dichas Depen-